

INFORMARTIVO DE RELATORIA

NOVIEMBRE DE 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez	Ejecutivo 05001233300020230055801 (70.852) Auto del 10 de octubre de 2024
<p>El Consejo de Estado resalta la importancia de actuar con rapidez para reclamar pagos de condenas contra entidades públicas y así no perder el derecho a los intereses moratorios.</p> <p>La Subsección estableció que la Ley 1437 de 2011 (CPACA) establece los términos bajo los cuales se deben presentar los reclamos, habiendo reducido el plazo de seis a tres meses. Si el reclamo no se presenta a tiempo, los intereses pueden cesar temporalmente, pero se reactivan una vez se notifica a la entidad pública deudora.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T-373 del 06 de septiembre de 2024
<p>La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional protegió los derechos de un soldado profesional retirado del Ejército Nacional debido a una patología psiquiátrica.</p> <p>La Corte subrayó que el retiro de soldados con discapacidad no puede ser arbitrario, sino que debe considerar su posible reubicación en funciones no militares dentro de la entidad.</p> <p>El Alto Tribunal Constitucional ordenó una nueva evaluación de las pruebas y la posible reubicación del exsoldado, garantizando sus derechos fundamentales y una protección laboral reforzada.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo	Sentencia T-286 del 17 de julio de 2024
<p>La Sala Sexta de la Corte revocó parcialmente la decisión de instancia proferida dentro del proceso de tutela adelantado por Lorenzo, gobernador de la comunidad indígena Métiwa Guacamayas, quien pretendía a través de la acción de tutela proteger los derechos de su comunidad frente a invasiones y persecuciones judiciales por el aprovechamiento de recursos naturales.</p>	

La Corte Constitucional amparó sus derechos a la seguridad alimentaria, autonomía indígena y territorio, y ordenó a Corporinoquía coordinar con la comunidad el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales.

También exigió al Ministerio del Interior implementar un plan de salvaguarda para la comunidad y a la Agencia Nacional de Tierras resolver las solicitudes de constitución del resguardo y protección del territorio ancestral en nueve meses.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Diana Fajardo Rivera	Sentencia T-377 del 10 de septiembre de 2024
<p>La Sala Tercera de Revisión protegió el derecho a la salud de tres personas mayores que indicaron que sus EPS no les prestaron los servicios de salud de manera oportuna y completa.</p> <p>Uno de los casos involucraba a una mujer con cáncer de colon, quien experimentó retrasos en su tratamiento. Los otros dos casos se referían a la falta de entrega de medicamentos en el lugar de residencia de los pacientes.</p> <p>La Corte recordó la especial protección constitucional para personas con cáncer y ordenó a las EPS entregar los medicamentos y pañales formulados. También subrayó la necesidad de garantizar la accesibilidad y continuidad de los medicamentos en el municipio de residencia de los pacientes para evitar barreras administrativas injustificadas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo	Sentencia T -389 del 18 de septiembre de 2024
<p>Natalia, reclutada forzosamente por las FARC-EP cuando tenía 11 años, sufrió violencia sexual y trabajos forzados. Escapó y, tras ser nuevamente secuestrada, solicitó su inscripción en el Registro Único de Víctimas. La Unidad para las Víctimas la reconoció por hechos contra su libertad e integridad sexual, pero no por secuestro.</p> <p>La Corte Constitucional amparó sus derechos y ordenó a la Unidad incluirla en el Registro por el secuestro, señalando la falta de motivación adecuada y la necesidad de superar barreras formales para el reconocimiento de las víctimas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia T-453 del 25 de octubre de 2024
<p>La Sala Quinta de Revisión protegió el derecho al debido proceso de un ciudadano con pérdida de capacidad auditiva, cuya cuenta en TikTok fue bloqueada por un error en la edad registrada.</p> <p>La red social, al bloquear su cuenta, ignoró las pruebas de que el usuario tenía 33 años.</p> <p>La Corte ordenó a TikTok abstenerse de bloquear la cuenta por motivos de edad sin fundamentos adecuados y asegurar el acceso a los canales de reclamación para resolver errores.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Vladimir Fernández Andrade	Sentencia T-460 del 01 de noviembre de 2024
<p>La Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de una accionante que fue discriminada por no tener carné de vacunación contra el COVID-19.</p> <p>La Corte determinó que el requisito de vacunación carecía de sustento jurídico y que vulneraba derechos fundamentales, pues no estaba previsto en los protocolos internos y no era necesario para prevenir la propagación del virus.</p> <p>La Corporación ordenó a la compañía ISHAJON S.A.S. iniciar el proceso de contratación para el mismo cargo y con los mismos beneficios laborales propuestos originalmente, y destacó que la obligatoriedad de la vacunación interfiere con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T-450 del 24 de octubre de 2024
<p>La Sala Segunda de Revisión protegió el derecho al debido proceso de dos ciudadanas que demandaron al Estado colombiano para reparar los perjuicios sufridos tras la ejecución extrajudicial de su familiar en 2007.</p> <p>La Corte concluyó que el Tribunal Administrativo del Magdalena desconoció el precedente judicial al declarar caducidad sin evaluar adecuadamente las circunstancias específicas del caso.</p>	

Ordenó readecuar el trámite para permitir alegatos de conclusión y valorar el impacto de las nuevas reglas jurisprudenciales en los derechos de las demandantes.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo	Sentencia T-410 del 30 de septiembre de 2024
<p>La Sala Primera de Revisión protegió el derecho fundamental al debido proceso de dos personas que se opusieron a la restitución de unos terrenos reclamados por una mujer que los vendió por necesidades económicas.</p> <p>La Corte ordenó evaluar si una de las accionantes debe ser reconocida como segunda ocupante debido a su vulnerabilidad, y otorgó órdenes a la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras para estudiar su reconocimiento como víctima del conflicto armado y la posibilidad de acceder a tierras.</p>	